

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00283-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 1.106.780.779 contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**.

ANTECEDENTES

El ciudadano **MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 1.106.780.779 inicia acción de tutela contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** por considerar que se le está vulnerando el **DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, MINIMO VITAL**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que es víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual y tiene VIH como consecuencia del hecho victimizante sufrido.

Indica que tiene radicado de cierre de su proceso de indemnización administrativa en el marco de la Resolución 1049 de 2019 desde el 18 de octubre de 2019.

Manifiesta que según la Resolución 1049 de 2019 aplican 120 días para resolver de fondo su trámite y se cumplieron el 14 de abril de 2020 y la entidad no ha emitido el acto administrativo que reconoce su derecho a la indemnización por vía administrativa en el marco del art. 11 de la Resolución 1049 de 2019.

Que se encuentra en ruta de priorización para el pago de la indemnización y en varias ocasiones ha puesto derechos de petición referente a su indemnización administrativa.

Señala que a través de la Defensoría del Pueblo se envió gestión directa No. 263 de 2020, solicitando dar cumplimiento al artículo 11 de la resolución 1049 de 2019, para que se notifique a la mayor brevedad el acto administrativo que resuelve la solicitud de indemnización, enviándole una respuesta mediante la cual se informa: *“que no se encuentra en criterio de priorización y será relacionado en los procesos de cruces y tramites tendientes a que se pueda incluir en la ejecución de pago para el mes de agosto 2020 cuya dispersión de recursos será el último día hábil; en este sentido la Dirección Territorial respectiva se*

comunicara con usted para informarle los tramites a realizar”; sin embargo hasta la fecha de hoy no se han comunicado con él.

Informa que actualmente se encuentra en condiciones difíciles de salud, económicas y sociales y necesita de la indemnización para continuar con sus tratamientos y llevar una vida digna, pues se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y que el Gobierno Nacional dadas las circunstancias que atraviesa el país por la pandemia de COVID- 19, dispuso la urgencia de pago de las indemnizaciones a las víctimas.

Por otra parte, considera que las respuestas dadas por la Unidad a sus peticiones, no contribuyen hacerle efectivo el pago de la indemnización administrativa a la que tiene derecho por ser víctima del conflicto armado, vulnerando su derecho a la vida integridad personal, igualdad, pues desde el hecho victimizante no ha podido regresar a su vida normal encontrándose afectado psicológicamente debido a la enfermedad por lo que se encuentra en un grado de vulnerabilidad alta.

Manifiesta que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas evade el pago de su indemnización administrativa desconociendo el dolor y sufrimiento que vivió por todos y cada uno de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y además desconoce la condición de extrema necesidad y vulnerabilidad en la que se encuentra; actuar que lo revictimiza obligándolo a acudir de una entidad a otra a suplicar se le dé trámite al pago de su indemnización y se cumpla lo establecido en la Ley.

En razón de lo anterior, solicita se ordene a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** expida el acto administrativo en el que se resuelva el reconocimiento de su indemnización administrativa por el hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual, además, acceda a la ruta de priorización para el pago de la indemnización.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

Copia de solicitud de indemnización.

Escrito dirigido a **MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA** expedido por la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**.

Certificación médica.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 01 de septiembre de 2020, se ordenó la notificación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 02 de septiembre de 2020, se notificó a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, a través del correo

institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud, quien brindo contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS.

La entidad accionada refirió: “(...) frente a la petición que manifestó elevar el accionante, me permito señalar que la misma fue resuelta por parte de la Unidad para las Víctimas por medio de comunicación escrita con radicado interno de salida No. 202072021717991 del 03 de septiembre de 2020.

Ahora bien, es importante manifestar al despacho que al validar el caso del señor MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA encontramos que el hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual, declarado bajo el marco de la ley 1448 de 2011, se encuentra actualmente en el banco desde el 29 de agosto del 2020.

Así mismo señor juez encontramos que el hecho victimizante fue objeto de reconocimiento y actualmente está bancarizado, sin embargo, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica ocasionada por la propagación del Virus COVID- 19 en Colombia y decretado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 de 2020, y buscando una posible alternativa que este acorde con las medidas de prevención, la Unidad para las Víctimas, en su firme compromiso con las víctimas del conflicto, implementó acciones tendientes a garantizar la entrega de la indemnización administrativa a las personas a las que se les haya reconocido el derecho, como es el caso del señor Miguel Angel Silva Tocarema.

Por lo anterior, la Unidad para las Víctimas en aras de no afectar el derecho a la indemnización por la emergencia económica, en coordinación con la entidad bancaria dispuso que los recursos estarán disponibles de manera contingente por 90 días, con el fin de evitar aglomeraciones, así mismo establecer una estrategia para el envío de la carta de pago y la carta de dignificación a través del correo certificado, garantizando la seguridad de la víctima y la efectiva disponibilidad del giro por concepto de indemnización ”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO FUNDAMENTAL MINIMO VITAL

El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional". (Sentencia T 678/17).

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos¹¹⁶, de manera que se garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.(Sentencia T-543/17).

Del caso en concreto.

Corresponde a la Juzgadora determinar si la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** viola los derechos fundamentales de **DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, MINIMO VITAL** del ciudadano **MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 1.106.780.779 al no proceder a expedir el acto administrativo que reconoce su derecho a la indemnización por vía administrativa en el marco del art. 11 de la Resolución 1049 de 2019.

Obra dentro del plenario, escrito de radicado de solicitud de indemnización, del que se lee: “su solicitud de indemnización administrativa respecto al hecho victimizante **DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL** ha sido recibida correctamente, la Unidad

para las Víctimas tendrá hasta 120 días hábiles para analizar la misma y notificarle una respuesta al respecto, es necesario que actualice sus datos de contacto y ubicación.

Usted podrá consultar con el siguiente radicado de la solicitud 001231058 en los diferentes canales de atención”.

Con la contestación de la demanda se allego memorando envíos respuestas por correo electrónico. Planilla 001- 17883, encontrándose relacionado como accionante en la casilla 10, bajo el radicado de salida No. 202072021717991 al correo electrónico migueltocarema@hotmail.com.

Además de lo anterior, obra escrito de contestación dirigido al accionante, de fecha 03/09/2020 del que se lee: “(...) en su caso particular los recursos se encuentran en el banco desde el 29 de agosto del 2020.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la dificultad que se presenta en algunos territorios para realizar la entrega de la carta de pago, si transcurridos los 90 días después de la colocación del giro antes referenciado se constata que definitivamente no se logró este proceso de notificación, la Unidad, se comunicara con usted para indicarle el procedimiento a seguir para que pueda hacer efectivo el cobro de sus recursos, todo lo anterior teniendo en cuenta las medidas preventivas adoptadas por la propagación del virus Covid- 19 en Colombia”.

Ha dicho la honorable Corte Constitucional, frente a la contestación de las peticiones que deben emitir las autoridades administrativas “... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho); Es por lo anterior, que considera la Juzgadora que la contestación dada por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS reúne las características señaladas por la Corte Constitucional, toda vez que se le señaló al accionante que los recursos correspondientes a la indemnización administrativa por el hecho victimizante DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL se encuentran en el banco desde el 29 de agosto del 2020, sin embargo y a raíz de la emergencia económica, ecológica y social que atraviesa el país a causa del virus COVID-19, se han adoptado medidas tendientes a evitar aglomeraciones en los bancos, por lo que en un límite máximo de 90 días, en caso de no haberse efectuado la notificación, procederá la entidad a contactarse con el tutelante para indicarle el procedimiento a seguir, y se haga efectivo el cobro de sus recursos.

Aunado a lo anterior, la respuesta fue remitida al correo migueltocarema@hotmail.com la que coincide con la informada en el escrito de tutela.

Por lo anterior y sin más consideraciones no se tutelarán los derechos fundamentales invocados por el actor.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el ciudadano **MIGUEL ANGEL SILVA TOCAREMA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 1.106.780.779 contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e4284ace8224fe9f3ecc2e23c37a60ae34aa9e6402b9d985bda7132d46a7a1ba**

Documento generado en 14/09/2020 05:42:20 p.m.